



'2020, año del 50 aniversario de la fundación de Cancún'.

## PRESIDENCIA

RECOMENDACIÓN No. CDHEQROO/13/2020/II

Sobre el caso de violación al derecho humano a la integridad, por actos de tortura en agravio de V.

Chetumal, Quintana Roo, a 11 de noviembre de 2020.

### C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

### C. PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

I. Una vez analizado el expediente número **VG/BJ/430/12/2016-4**, relativo a la queja presentada por **V**, por violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, atribuidas a **servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo**; con fundamento en los artículos 102 apartado B, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 94 párrafos primero y séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2 párrafo primero, 4, 10 fracción II, 11 fracción VI, 22 fracción VIII, 54 párrafo primero y, 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; así como el diverso 45 de su Reglamento; esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emite la presente Recomendación.

Con la finalidad de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos investigados y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omite su publicidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, párrafo primero, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en relación con los numerales 68, fracción VI y 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Dicha información se pondrá en conocimientos de las autoridades recomendadas a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. Para evitar repeticiones innecesarias, se utilizan abreviaturas que se identifican como sigue:

Abreviaturas	Concepto
V	Víctima
AR1	Autoridad Responsable 1
AR2	Autoridad Responsable 2

AR3	Autoridad Responsable 3
AR4	Autoridad Responsable 4
AR5	Autoridad Responsable 5
AR6	Autoridad Responsable 6
PM1	Perito Médico 1
PM2	Perito Médico 2
PM3	Perito Médico 3
PPS	Perito en Psicología
CP1	Causa penal 1
AP1	Averiguación Previa 1
AP2	Averiguación Previa 2
SMSPT	Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez
FGE	Fiscalía General o Procuraduría General de Justicia del Estado
PME	Policía ministerial o policía judicial del Estado

## II. ANTECEDENTES.

*Con fundamento en el artículo 45, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en este apartado se describen los hechos violatorios de derechos humanos, la postura de la autoridad frente a los mismos, y se enumeran las evidencias que demuestran la violación referida.*

### Descripción de los hechos violatorios.

En su escrito de queja presentado el 14 de diciembre de 2016 ante esta Comisión, V manifestó que en fecha 14 de abril de 2013, aproximadamente a las 08:00 horas lo intervinieron agentes de SMSPT cuando se trasladaba a bordo de un taxi; refirió que dos agentes en motocicleta lo bajaron, revisaron y golpearon, preguntándole para quien trabajaba; también le dijeron que lo intervinieron por el reporte de un homicidio que sucedió hacía una hora, luego, lo trasladaron a las instalaciones de la SMSPT donde elementos de la corporación lo ingresaron a un baño donde nuevamente lo golpearon, señaló que eran los mismos que lo detuvieron que se trasladaban en motocicleta y un militar. Asimismo, mencionó que lo tiraron al suelo y le aplicaron toques eléctricos pretendiendo que hablara sobre el homicidio, sin embargo, les dijo que no sabía nada de ello.



Previo certificación médica, lo trasladaron a la entonces Subprocuraduría General de Justicia del Estado en la ciudad de Cancún, donde lo presentaron ante el MP por posesión de drogas, seguidamente lo ingresaron a una celda con el rostro cubierto y con grilletes; posteriormente, los entonces agentes de la PME lo sacaron de la celda con el rostro cubierto y lo torturaron para obligarlo a firmar una declaración sin la asistencia de un abogado. Refirió que la tortura consistió en golpes, le cubrieron su cabeza con una bolsa y descargas eléctricas para que declarara sobre el homicidio, sin embargo, nunca declaró sobre ello porque no sabía nada, pero lo forzaron para estampar su huella digital en una declaración escrita. Refirió también que a sus familiares les negaron que se encontraba detenido.

Con fecha 16 de junio de 2017, personal de esta Comisión, levantó un acta circunstanciada en la que se hizo constar lo manifestado por V de que fue detenido y golpeado por los mismos elementos de la policía preventiva de la SMSPT que lo detuvieron; luego, estando a disposición del MP fue víctima de tortura en manos de agentes de la PME.

#### Postura de la autoridad.

Mediante oficio número FGE/VFZN/DPMIZN/A-4516/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, suscrito por el Director de la Policía Ministerial de Investigación en la Zona Norte, la autoridad rindió el informe sobre los hechos. El servidor público manifestó que no encontraron registros del año 2016 a nombre de V, negando los actos y omisiones por parte de agentes de la PME.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, con fecha 03 de enero de 2017, se recibió el oficio número UJ-16077/2016 suscrito por el Coordinador General de la Dirección de la Unidad Jurídica de dicha Secretaría, a través del cual el servidor público manifestó que no se localizó tarjeta informativa o puesta a disposición que se relacionara con la detención de V.

Ante la negativa por parte de ambas instituciones se solicitaron copias certificadas de la CP1 al Juez de Primera Instancia en la ciudad de Cancún.

En fecha 14 de diciembre de 2017, previa solicitud, fue recibido el oficio FGE/VFZN/DDHZN/658/12-2017, por medio del cual la Directora de Derechos Humanos en la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, nuevamente negó que existieran registros con el número de la AP1, iniciada en contra de V cuando fue detenido presuntamente en posesión de drogas.

En fecha 19 de enero de 2018, mediante oficio número FGE/VFZN/DDHZN/028/01-2018, la Directora de Derechos Humanos en la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado proporcionó los nombres de



los agentes que detuvieron a **V**, y adjuntó copia del certificado médico de integridad física que le realizó el **PM1** de la **SMSPT** a **V**, correspondiente a su puesta a disposición ante el **MP**, así como del dictamen médico de integridad física que le realizó el **PM3** de la **FGE**; de igual forma copia del informe de investigación sobre los hechos por el cual se encontraba detenido -posesión de drogas- y copia del parte informativo suscrito por **AR1**, **AR2** y **AR3** en relación a la detención de **V** y otros, como responsables de posesión de drogas.

Con relación al fundamento y motivo de la detención, en la transcripción del parte informativo signado por **AR1**, **AR2** y **AR3**, narraron que al encontrarse en su servicio de prevención y vigilancia se percataron de un taxi con ventanas polarizadas estacionado sobre la vía pública, observaron que el conductor no contaba con su uniforme del sindicato, mismo quien se dio a la fuga para tratar de evadirlos pero le dieron alcance y, cuando le realizaron una revisión a **V** le encontraron bolsas de plástico al parecer de *crack*, supuestamente les dijo que los vendía, por lo cual, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la **SMSPT** para ser puesto a disposición del **MP**.

#### Evidencias.

A continuación, se enlistan las evidencias del expediente de queja que demuestran la violación a los derechos humanos señalados, que fueron observadas para esta Recomendación:

1. Escrito de queja de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por **V** por presuntas violaciones a derechos humanos cometidos en su agravio.
2. Informe rendido por el Director de la Policía Ministerial de Investigación en la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, en fecha 23 de diciembre de 2016, mediante oficio FGE/VFZN/DPMIZN/A-4516/2016.
3. Oficio número UJ-16077/2016, recibido en fecha 03 de enero de 2017, suscrito por el Coordinador General de la Dirección de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, mediante el cual rindió su informe sobre los actos imputados a los agentes de esa corporación; adjuntando al mismo los siguientes documentos:
  - 3.1. Copia de los oficios DAI/3357/2016, signado por el Director de Asuntos Internos, y DPP/EA/6315/2016 signado por el Encargado de Enlace Administrativo de la Policía Preventiva, ambos de fecha 21 de diciembre de 2016; y SMSPYT/DIC/3579/2016, signado por el Subdirector de Teleradiocomunicaciones y Sistemas Informáticos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, de fecha 23 de enero de 2016.



4. Acta circunstanciada de fecha 16 de junio de 2017, suscrita por personal de este Organismo en la que se hicieron constar las manifestaciones de **V**, en contra de las autoridades responsables, cuando se le notificó lo informado por éstas.

5. Oficio número C-5685/2017, recibido en fecha 31 de octubre de 2017 suscrito por el Secretario de Estudio y Cuenta de Sala en funciones de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual, previa solicitud, remitió copia certificada de la **CP1** y sus acumulados, que se instruyó en contra de **V** y otros, de la cual se desprenden las siguientes constancias:

5.1. Oficio PJE-0662/2013 a través del cual el agente de la **PME**, **AR4** rindió un informe de investigación en relación con la **AP2**, en el que obra la entrevista que le hizo a **V** por el delito de homicidio.

5.2. Acta circunstanciada de fecha 15 de abril de 2013, mediante la cual se hizo constar la declaración de **V** ante el Ministerio Público **AR5**, adscrito a la entonces Subprocuraduría de Justicia Zona Norte del Estado de Quintana Roo, asistido del oficial secretario **AR6** con relación a la **AP2**.

5.3. Declaración preparatoria de **V** de fecha 19 de abril de 2013, ante la Secretaria del Juzgado en funciones de Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

5.4. Careo Constitucional de **V** y **AR4** en fecha 10 de junio de 2016, ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia en la ciudad de Cancún.

5.5. Pericial Médica practicada a **V**, por **PM2** relacionada con la **CP1**, de fecha 24 de junio de 2017.

6. Oficio número FGE/VFZN/DDHZN/658/12-2017, recibido en fecha 14 de diciembre de 2017, suscrito por la Directora de Derechos Humanos Zona Norte la Fiscalía General del Estado, mediante el cual remitió:

6.1. Oficio número 950/2017 signado por el Agente de Ministerio Público del Fuero Común encargado de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Mesa XI, Región 94, del Sistema Tradicional, donde informó que no se encontró registro de la averiguación previa en la que estuviera relacionado **V**.

7. Oficio número FGE/VFZN/DDHZN/028/01-2018, recibido en fecha 19 de enero de 2018, suscrito por la Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte, mediante el cual

rindió el informe sobre los hechos que señaló **V** en contra de servidores públicos de esa instancia; así mismo, remitió los siguientes documentos:

**7.1.** Copia simple del oficio número UJ/4987/2013, mediante el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público a **V**, suscrito por **AR1**, **AR2** y **AR3**.

**7.2.** Copia simple del parte informativo sobre la detención de **V**, con folio DPP/UJ/808/2013, suscrito por **AR1**, **AR2** y **AR3**, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez.

**7.3.** Copia simple del Certificado Médico de fecha 14 de abril de 2013, practicado a **V** por **PM1** adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez.

**7.4.** Copia simple del dictamen médico de integridad física de fecha 16 de abril de 2013, practicado a **V** por **PM3** Perito Médico Legista, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

**7.5.** Copia del oficio PJE/252/2012 de fecha 16 de abril de 2013, mediante el cual la policía ministerial rindió un informe de investigación en relación con la **AP1** en el cual refirió la entrevista a **V** en relación con su detención por el ilícito de posesión de drogas.

**8.** Oficio número UJ/1428/2017, recibido en fecha 8 de febrero de 2018, suscrito por el Coordinador General de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, en el cual informaron que **AR1** y **AR2** ya no son elementos activos de dicha corporación.

**9.** Acta Circunstanciada de fecha 15 de febrero de 2018, en la que se hizo constar la comparecencia de **AR3**, ante este Organismo.

**10.** Peritaje Psicológico practicado a **V** conforme al Protocolo de Estambul por el perito en psicología jurídica, legal y forense **PPS**, suscrito en fecha 14 de septiembre de 2018.

### III. SITUACIÓN JURÍDICA.

*Conforme al numeral 45, fracción III, del Reglamento de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en este apartado se hace una narración sucinta del hecho controvertido, y como el mismo constituye una violación a los derechos humanos.*



### Narración sucinta de los hechos.

En fecha 14 de abril de 2013, V se encontraba a bordo de un taxi cuando fue intervenido por AR1, AR2 y AR3, agentes de la SMSPT quienes refirieron que cuando lo revisaron le encontraron droga; también se advierte que lo golpearon para que les informara en relación con los puntos de venta del estupefaciente. Después V, fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez donde lo siguieron golpeando, pretendiendo que confesara para quién trabajaba en la venta de la droga y lo interrogaron con relación a un homicidio. Posteriormente fue puesto a disposición del MP por delitos contra la salud, lugar donde se hizo constar que V presentaba lesiones visibles en esternón, eritema en el cuello; a lo que V señaló que esas lesiones se las ocasionaron los policías municipales que lo detuvieron.

Posteriormente, en las instalaciones de la FGE en la ciudad de Cancún, agentes de la PME lo torturaron con golpes en distintas partes del cuerpo y lo asfixiaron cubriéndole con una bolsa la cabeza, le aplicaron electroshocks, le pusieron chile en la cara, lo amenazaron e incomunicaron; y, lo obligaron a firmar su declaración ministerial auto incriminándose dentro de la AP2 relativa a la CP1 y sus acumulados por el delito de homicidio calificado, siendo que al respecto, V identificó a uno de los agentes de la PME que lo torturaron, refiriéndose al agente AR4.

### Violación a los derechos humanos.

La protección al derecho a la integridad personal y la prohibición de actos de tortura se encuentran tutelados en los artículos 19 última parte, 20 apartado B fracción II, así como 22 primer párrafo. Igualmente está reconocido explícitamente en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 5, numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 2, párrafos 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; entre otros. Instrumentos legales que conforme a lo establecido en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 133, son norma suprema y de observancia obligatoria para todas las autoridades en los tres ámbitos de gobierno.

Adicionalmente, la tortura se encuentra tipificada como delito desde el año 1992 en el Estado de Quintana Roo, el artículo tercero de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Quintana Roo tipificaba el delito de tortura de la siguiente manera *"Comete el delito de tortura El Funcionario Público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada"*. Esta ley fue abrogada por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,





Inhumanos o Degradantes, misma que establece un tipo penal más amplio en sus artículos 24, 25 y 26.

Por último, con sus acciones los servidores públicos responsables faltaron a sus obligaciones específicas como integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, establecidas en los artículos 40, fracciones I, VI, IX y XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 65, fracciones I, VI, IX y XVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; así como el artículo 47, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo y artículos 7 fracción I y VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al haber realizado acciones y omisiones consideradas como "Tortura" en agravio de V; los servidores públicos AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 vulneraron el derecho humano de integridad y seguridad personal, así como el derecho humano a las garantías judiciales, contemplados en los artículos 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

#### IV. OBSERVACIONES.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, fracción IV, del Reglamento de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, este apartado contiene la vinculación de los actos u omisiones controvertidos con los medios de convicción con los cuales se tienen acreditados y, cómo éstos trasgreden disposiciones del orden jurídico mexicano e instrumentos jurídicos internacionales, con un enfoque lógico-jurídico de máxima protección de las víctimas de violaciones a esos derechos, a la luz de los estándares nacionales e internacionales en la materia, de los precedentes emitidos, y de criterios jurisprudenciales tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplios y suficientes para acreditar la trasgresión a los derechos humanos de la víctima.

Antes de entrar al análisis de los medios de convicción con los cuales se tienen acreditados los hechos violatorios, así como de analizar los derechos humanos violentados con esos actos y omisiones, esta Comisión considera importante recordar que la naturaleza jurídica de los procedimientos no jurisdiccionales de tutela y defensa de los derechos humanos no es acreditar la responsabilidad individual, ya sea administrativa o penal, de los servidores públicos responsables; el objetivo de los procedimientos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos es determinar si las acciones u omisiones realizadas por la autoridad constituyen o no violaciones a los mismos.

En ese orden de ideas, el estándar probatorio exigible en los procedimientos de investigaciones por violaciones a derechos humanos por petición individual a través de quejas presentadas por la





## PRESIDENCIA

ciudadanía es distinto al aplicable a los procesos jurisdiccionales. Adicionalmente, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso en los procesos jurisdiccionales, el estándar probatorio para acreditar tortura como hecho violatorio a derechos humanos es diferente al necesario para acreditar el delito.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara y sistemática al respecto, sirve de ejemplo lo resuelto en el Amparo en Revisión 2333/2017, en cuya sentencia señaló que cuando se analiza la tortura como violación al derecho a la integridad personal *"para tenerla por acreditada bastará que se demuestre la existencia de la mencionada afectación a la integridad personal, aunque de momento no sea posible identificar al o los responsables"*.

Esta Comisión reitera lo que ha sido un pronunciamiento constante en las Recomendaciones que ha emitido; la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tiene la obligación de investigar, procesar y en su caso sujetar a proceso a las personas que cometan acciones u omisiones tipificadas como delitos. Las personas que comentan conductas delictivas deben ser sujetas a los procesos y/o procedimientos establecidos en la ley a fin de que sus actos sean investigados, y en su caso, sancionados, pero siempre dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.

Las víctimas de los delitos tienen derecho a que se protejan sus derechos humanos, a que las investigaciones ministeriales sean adecuadas y profesionales como parte del derecho de acceso a la justicia. Las investigaciones realizadas a través de acciones ilegales como los actos de tortura propician violaciones al debido proceso que a la larga repercute en el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia; además convierte a sus perpetradores en delincuentes.

### Vinculación con medios de convicción.

Ahora bien, para efecto de guardar un orden en el estudio de los argumentos mediante los cuales esta Comisión llegó a la firme convicción de que las autoridades responsables señaladas por V en su escrito de queja violentaron sus derechos humanos a su integridad personal; para el análisis y argumentación se abordará en primer término lo concerniente a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, y posteriormente lo referente a servidores público de la Fiscalía General del Estado.

#### a) Servidores públicos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Una vez analizadas las evidencias descritas y recabadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se acreditó la existencia de acciones y/u omisiones constitutivas de



violaciones al derecho a la integridad personal en agravio de **V**; específicamente, se comprobó que durante su detención y, mientras lo tuvieron bajo su custodia, los elementos de la **SMSPT** se extralimitaron en el uso de la fuerza causándole lesiones como una forma de sufrimiento y/o de obtener información.

En primer orden, con las evidencias **1, 7.1 y 7.2** se tiene acreditado que **V** fue detenido por elementos de la policía preventiva de la **SMSPT** quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de Cancún como responsable de la comisión de delitos contra la salud por posesión de drogas; refirieron que fue detenido en flagrancia cuando iba a bordo de un taxi con otra persona, según consta en el documento de puesta a disposición del detenido - **evidencia 7.1-**, firmado por **AR1, AR2 y AR3** en calidad de elementos de la policía preventiva de la citada corporación, quienes participaron en la detención; de igual manera suscriben en esa misma calidad el parte informativo de los hechos respecto a la detención de **V** por posesión de drogas - **evidencia 7.2-**.

Conforme a la **evidencia 7.3** que lo constituye el certificado médico que le practicó **PM1, perito médico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez** a **V**, se acreditó que se encontraba con lesiones al momento de ser presentado a disposición del **MP** por los agentes de la policía municipal preventiva; dichas lesiones consistieron en hematoma en región esternal, eritema en tórax posterior, eritema en cuello y dermoabrasión en tórax.

Esas mismas lesiones se hicieron constar en el dictamen médico de integridad física que le realizó **PM3, perito médico legista adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la entonces Procuraduría General del Estado**, cuando ya estaba a disposición del ministerio público, el documento constituye la **evidencia 7.4**.

Si bien, en el informe rendido sobre los hechos manifestados por **V -evidencias 3 y 3.1-**, la **SMSPT** refirió que no tenía registro sobre la detención de **V**, y por lo cual no mencionó nada sobre la imputación del quejoso y las lesiones que tenía; así mismo, **AR3** en su comparecencia ante este Organismo, declaró que no recordaba nada sobre las lesiones que tenía **V -evidencia 9-**; sin embargo, está acreditado que **V** fue detenido por **AR3** y, cuando lo presentaron ante el **MP** tenía las lesiones que se hicieron constar en las **evidencias 7.3 y 7.4**. No se omite referir que aunque se solicitó la comparecencia de **AR1 y AR2**, el **Coordinador General de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento de Benito Juárez**, informó a este Organismo que **AR1 y AR2**, que éstos ya no son agentes activos de la **SMSPT**, ello conforme se señaló en la **evidencia 8**.

En ese contexto, si **V** presentó lesiones al momento de ser puesto a disposición del ministerio público, se presume la imputación de la responsabilidad a la autoridad que realizó su detención y



custodia y quien debía en todo momento garantizar su integridad física, en este caso a los agentes de la SMSPT, AR1, AR2 y AR3 quienes no justificaron por qué tenía esas lesiones en el momento en que lo presentaron ante la autoridad ministerial, máxime que V les imputó directamente actos de tortura conforme a las evidencias 1 y 4.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución del caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú; sentencia de 25 de noviembre de 2006, párrafo 273, estableció de manera clara y categórica que si una persona presenta afectaciones a su integridad personal y le imputa esas afectaciones a agentes estatales durante el tiempo que estuvo detenido o bien, custodiado, el deber de la autoridad desvirtuar esas imputaciones y de proveer una explicación satisfactoria y convincente a través de elementos probatorios adecuados, nunca puede ser trasladada esa obligación a la víctima de tortura. Se transcribe la parte conducente de la jurisprudencia interamericana mencionada:

*"273. La Corte ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Es posible considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de ellos. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados."*

Es importante resaltar que, conforme a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 21/2014 (10ª), "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", todas las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio es vinculante. Lo anterior, según refirió nuestra Corte Suprema, se desprende de la obligación que tienen todas las autoridades de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos aplicando el principio pro persona, mandato establecido en el artículo 1º constitucional.

En el presente caso, la autoridad no aportó ninguna explicación lógica ni de descargo acerca de las razones por las que V presentaba las lesiones referidas en la evidencia 7.3 cuando lo pusieron a disposición del MP, ni cómo se produjeron éstas; tampoco lo hizo AR3 quien participó en su detención y custodia, pues en su comparecencia ante este Organismo -evidencia 9- aunque se le preguntó sobre las lesiones, refirió que no se percató de las mismas. En ese orden de ideas, V



manifestó sobre las lesiones que tenía cuando lo presentaron ante el MP, -evidencias 4 y 5.3- que le fueron causadas con el propósito de procurarle sufrimiento y/u obtener información sobre para quién trabajaba en la venta de drogas y sobre un homicidio por el cual también lo procesaron dentro de la CP1, lo cual ratificó ante el médico PM2 y el psicólogo PPS, que le practicaron los dictámenes médico y psicológico conforme al Protocolo de Estambul -evidencias 5.5 y 10-.

Ahora bien, este Organismo concluyó que se acreditan las violaciones a los derechos humanos de V por tortura por parte de los agentes de SMSPT. Lo anterior es así en razón al propio señalamiento de V en su escrito de queja -evidencia 1- respecto de que fue golpeado para obligarlo a decir para quién trabajaba en la distribución de droga, después sobre su participación en un homicidio, y dicha afirmación se refuerza con la circunstancia de que, cuando fue puesto a disposición del MP tenía lesiones, tal y como consta en el certificado médico que le practicó el PM1 -evidencia 7.3- y, la autoridad en ningún momento justificó el origen de las lesiones siendo que tuvieron la responsabilidad de garantizar su integridad desde el momento que lo detuvieron hasta que lo pusieron a disposición del MP.

De manera indiciaria refuerza el señalamiento del quejoso el hecho de que al siguiente día de su detención y presentación al MP por el presunto ilícito de posesión de drogas, conforme a la evidencia 5.1 fue entrevistado por AR4 por un homicidio en relación a la AP2 y de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, no hay evidencias de cómo los agentes de la policía ministerial se pudieron enterar de su relación, sino a través de los agentes de SMSPT que lo presentaron.

Así mismo, refuerza la acreditación de la tortura de que fue objeto V, el dictamen psicológico que le realizaron en el Juzgado Primero Penal, conforme al Protocolo de Estambul para encontrar indicios de tortura, por lo cual PPS, Perito en Psicología Jurídica, Legal y Forense del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó:

#### "CONCLUSIÓN PSICOLOGICA

*Los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas no muestran exageración de sintomatología. Se puede considerar como ciertos los resultados de los instrumentos psicológicos ya que se correlacionan positivamente con los datos clínicos obtenidos en la entrevista y a su vez con los criterios diagnósticos necesarios establecidos en el DSM 5 para obligar para obtener diagnóstico del "Trastorno de Estrés Postraumático"*

*LOS SÍNTOMAS REGISTRADOS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS YA QUE SE CORRELACIONA POSITIVAMENTE LO MANIFESTADO POR EL PERITADO EN LA ENTREVISTA LAS*



*PRUEBAS APLICADAS Y LAS EVIDENCIAS PSICOLÓGICAS DE REFERENCIA DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO".*

*"CONCLUSIONES DE TORTURA*

*SE ESTABLECE PERICIALMENTE QUE EL CUADRO PSICOEMOCIONAL REFERIDO POR EL PERITADO ES COMPATIBLE, YA QUE EXISTE CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE LO MANIFESTADO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS, LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO Y EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN 1 Y DOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES." (SIC)*

De lo anterior, se advierte que los hechos y circunstancias referidas por el impetrante de derechos humanos, compulsadas con las evidencias que obran en el sumario, entre las que resaltan los dictámenes periciales expuestos en el cuerpo de la presente Recomendación, se tiene la certeza de que **V** fue torturado por los servidores públicos de la **SMSPT**, ya que las lesiones descritas en las documentales correspondientes concuerdan con la exposición de los hechos denunciados, lo que correlacionado con el dictamen psicológico emitido por **PPS** conforme el Protocolo de Estambul, se infiere que los actos de tortura denunciados fueron producidos por terceras personas y que su estado psicológico es producto de un estrés postraumático.

Así mismo, este Organismo considera que **AR1, AR2 y AR3** son responsable de realizar actos y/u omisiones constitutivas de violaciones a los derechos humanos a la integridad personal de **V** consistentes en actos de tortura, cuando lo detuvieron y custodiaron hasta antes de ponerlo a disposición del **MP**, pues como se refirió, **V** los señaló como las personas que lo torturaron para que dijera para quién vendía droga y, en relación con un homicidio que le imputaban, evidencia 4.

**b) Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.**

Ahora bien, respecto a los hechos manifestados por **V**, en el sentido de que cuando estuvo detenido en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en la ciudad de Cancún, en donde fue entrevistado, investigado y obligado a auto incriminarse mediante actos de tortura por la presunta comisión del delito de homicidio **-AP2-**, esto es, un hecho diverso por el que realmente fue detenido (por posesión de drogas) **-AP1-**, se acreditó que fue sometido a actos de violencia física y psicológica.

No pasa desapercibido por este Organismo garante de los derechos humanos que en los informes rendidos por parte del Director de la Policía Ministerial de Investigación en la zona Norte, así como la Directora de Derechos Humanos Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, negaron en un



principio los hechos violatorios a derechos humanos en agravio de **V**, al mencionar que no obraba registro de averiguación previa que estuviera relacionado **V**, como consta en las evidencias **2, 6 y 6.1**, sin embargo, de las constancias que obran en la **CP1** y sus acumuladas, remitida por el Secretario de Estudio y Cuenta de Sala en funciones de Juez Primero Penal de la Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, **evidencia 5**, se desprendieron diversas constancias que acreditaban los hechos, por lo cual posteriormente, mediante la **evidencia 7**, la Fiscalía General del Estado a través de la Directora de Derechos Humanos, reconoció la existencia de los hechos y rindió un informe sobre los mismos.

Conforme a las evidencias que forman parte del expediente de queja en que se actúa, se acreditaron en un primer momento los hechos de tortura que refirió **V** en contra de agentes de la policía ministerial con las propias afirmaciones que hizo en su escrito de queja **evidencia 1**; reafirmando su dicho ante personal de este Organismo cuando se le notificó un informe de la policía municipal preventiva, lo cual se hizo constar en acta circunstanciada, misma que constituye la **evidencia 4**; así mismo, cuando rindió su declaración preparatoria ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia en la ciudad de Cancún -**evidencia 5.3**-; también lo manifestó cuando lo entrevistó el PPS para realizarle el dictamen psicológico conforme el Protocolo de Estambul -**evidencia 10**-.

A juicio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la imputación realizada por **V** en contra de los agentes de la **PME** sobre los actos de tortura se acreditaron mediante las reglas de la lógica y la experiencia, máxime que por la naturaleza de esos actos generalmente suceden en lugares sin testigos en donde el victimario tiene un control prácticamente absoluto sobre su víctima. Sin embargo, una circunstancia probatoria a favor de **V** que refuerza su queja interpuesta ante este Organismo Constitucionalmente Autónomo, es el hecho de declararse culpable del delito de homicidio dentro de la **AP2** -**evidencia 5.2**- el 15 de abril de 2013, la cual no ratificó cuando rindió su declaración preparatoria en fecha 19 de abril de 2013 y por el contrario, en esa diligencia refirió que fue víctima de hechos de tortura por agentes de la policía municipal preventiva y de la policía ministerial -**evidencia 5.3**-.

Refuerza la afirmación de **V**, las lesiones que tenía en su persona y las cuales se hicieron constar en los certificados médicos practicados por el **PM3** de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo -**evidencia 7.4**-; así como la fe ministerial de lesiones que se hizo constar en el acta de su declaración preparatoria dentro de la **CP1** -**evidencia 5.3**-.

Al respecto, mientras en el certificado médico que le practicaron a **V** en fecha 14 de abril de 2013 por **PM1** se describieron las siguientes lesiones: hematoma en región de esternón, eritema en tórax posterior, eritema en cuello, dermoabrasión en tórax -**evidencia 7.3**-. En el certificado médico que le



realizó **PM3** en fecha 16 de abril de 2013, se describieron las siguientes lesiones: equimosis en tórax a nivel de esternón de un diámetro de 4x6cm, excoriaciones en tórax posterior; además de dolor de cabeza y región de ambos pliegues inguinales **-evidencia 7.4-**, con lo cual se acreditaron nuevas lesiones, diferentes a las que tenía cuando fue presentado por los agentes de la **SMSPT**.

Asimismo, cuando rindió su declaración preparatoria **-evidencia 5.3-** por el delito de homicidio relativo a la **CP1** se dio fe ministerial de que presentaba las siguientes lesiones: *"un hematoma de forma circular en el área central del los pectorales con una circunferencia de ocho centímetros aproximadamente, dos heridas abrasivas de formas lineales de aproximadamente de cuatro y tres centímetros de largo y dos centímetros de ancho, respectivamente e inflamación del tobillo izquierdo"*, las lesiones últimas no las presentaba cuando fue puesto a disposición del **MP** por los agentes de la policía preventiva. Esa circunstancia es un indicio que acredita que **V** fue torturado por los agentes de la **PME**.

Siguiendo con la correlación de las evidencias con las circunstancias de hechos, es importante recalcar que en la **evidencia 5.3** que lo constituye la declaración preparatoria de **V** dentro la **CP1** por el delito de homicidio, en fecha 19 de abril de 2013 manifestó que no ratificaba la declaración ministerial que obraba como suya en la **AP2 -evidencia 5.2-** en la que se auto inculcaba por el delito de homicidio; al respecto, señaló que fue torturado desde su detención por agentes de la policía preventiva, posteriormente por agentes de la **PME** cuando lo presentaron ante el **MP** para que se declarara culpable de ese ilícito; refirió que lo golpearon, le embolsaron en la cabeza y le colocaron chile en el rostro, hasta que no soportó más los golpes y lo hicieron firmar papeles, los cuales no le dieron a leer. Aunado a lo anterior, de la **evidencia 5.4**, se desprende que **V** imputó a **AR4** como uno de los responsables de tortura por parte de los agentes de la **PME**, refiriendo que lo obligó a poner su huella en el acta sobre su declaración ministerial dentro de la **AP2**, cuando estaba detenido en calidad de probable responsable dentro la **AP1** por el delito de posesión de drogas, por lo cual se deduce que fue forzado por los agentes de la **PME** quienes lo tenía bajo su custodia, pues resulta inverosímil que voluntariamente se auto inculcaba por el delito de homicidio calificado en su declaración ministerial, misma que fue suscrita por el agente del **MP** y su secretario de acuerdos **AR5 y AR6**.

Así mismo, resulta sospechoso el hecho de que, primero lo entrevistó **AR4** por el delito de homicidio dentro de la **AP2**, el 14 de abril de 2013, como se acredita con la **evidencia 5.1**, después, lo entrevistaron por el delito de posesión de drogas por el cual se encontraba detenido en flagrancia en relación con la **AP1 -evidencia 7.5-** pues esto último ocurrió hasta el 16 de abril de 2013, dos días después. Lo cual hace suponer que el motivo preponderante de su detención era relacionarlo con un homicidio y no por de posesión de drogas.



## PRESIDENCIA

Por último, de las constancias que integran la **CP1, evidencia 5**, se observa que, desde el momento de la detención de **V** por la supuesta flagrancia en relación con la averiguación previa por delito contra la salud, no existía en la **CP1** indicio probatorio que lo señalara de haber participado en el homicidio calificado investigado. No obstante, durante el tiempo que estuvo detenido con relación a la **AP1** por posesión de drogas, es decir, durante el plazo de 48 horas, personal de la **FGE** obtuvo su declaración ministerial por el delito de homicidio dentro de la **AP2**, auto inculminándose.

De igual forma, en la pericial médica que le fue practicada a **V** por **PM2**, en relación con las lesiones que refirió le causaron los agentes de la policía municipal preventiva que lo detuvieron y los agentes de la policía ministerial cuando lo obligaron a auto inculminarse por el delito de homicidio - **evidencia 5.5-**, determinó:

*"A PESAR DE QUE HAN TRANSCURRIDO 1487 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÍAS) DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS EN LA SECCIÓN IV -PADECIMIENTO ACTUAL- DE ESTE DOCUMENTO, CON LOS ESTUDIOS PRACTICADOS SE DESPRENDE Y SE DEDUCE CLÍNICAMENTE QUE ES ALTAMENTE PROBABLE QUE SI EXISTIERON LESIONES PRODUCIDAS POR TERCEROS QUE AFECTARON GRAVEMENTE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE DERIVADAS DEL EXTERIOR ABUSO FÍSICO AL QUE FUE SOMETIDO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2013 Y QUE ENCAJAN EN FORMAS DE TROTURA CRUEL E INHUMANA MISMAS QUE POR SU NATURALEZA DEBIERON SER TRATADAS MEDICAMENTE A EFECTO DE MINIMIZAR LOS DAÑOS EN LA ACTUALIDAD TIENE SECUELAS SEVERAS, DISMINUCIÓN IMPORTANTE EN SU CALIDAD DE VIDA, DAÑOS EMOCIONALES Y FÍSICOS ALGUNO DE ELLOS MUY PROBABLEMENTE IRREVERSIBLES."* (SIC)

Por otra parte, en el Peritaje Psicológico -**evidencia 10-** que le fue practicado a **V** conforme al Protocolo de Estambul por el especialista **PPS**, se concluyó lo siguiente:

**"CONCLUSIÓN PSICOLÓGICA"**

*Los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas no muestran exageración de sintomatología. Se puede considerar como ciertos los resultados de los instrumentos psicológicos ya que se correlacionan positivamente con los datos clínicos obtenidos en la entrevista y a su vez con los criterios diagnósticos necesarios establecidos en el DSM 5 para obligar para obtener diagnóstico del "Trastorno de Estrés Postraumático"*

**LOS SÍNTOMAS REGISTRADOS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS YA QUE SE CORRELACIONA POSITIVAMENTE LO MANIFESTADO POR EL PERITADO EN LA ENTREVISTA LAS**



*PRUEBAS APLICADAS Y LAS EVIDENCIAS PSICOLÓGICAS DE REFERENCIA DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO".*

*"CONCLUSIONES DE TORTURA*

*SE ESTABLECE PERICIALMENTE QUE EL CUADRO PSICOEMOCIONAL REFERIDO POR EL PERITADO ES COMPATIBLE, YA QUE EXISTE CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE LO MANIFESTADO, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS APLICADAS, LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO Y EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN 1 Y DOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. (SIC)"*

En conclusión, con los hechos y circunstancias referidas en relación con las evidencias señaladas se tiene la certeza de que **V** fue torturado por los servidores públicos de la FGE, conforme a los argumentos señalados y los dictámenes periciales referidos, ya que, las lesiones descritas en las documentales correspondientes concuerdan con la exposición de los hechos que manifestó, lo que de manera correlacionada con el dictamen psicológico emitido por PPS conforme el Protocolo de Estambul, se infiere que los actos de tortura denunciados fueron producidos por terceras personas y que su estado psicológico es producto de un estrés posttraumático.

Así mismo, este Organismo considera que **AR4** es responsable de realizar actos y/u omisiones constitutivas de violaciones a los derechos a la integridad personal de **V** consistentes en actos de tortura cuando estaba bajo resguardo de los agentes de la PME, pues como se refirió, lo señaló como uno de los agentes que lo torturó y, quien lo obligó a estampar su huella en su declaración ministerial; además, el propio agente rindió un informe de investigación en el cual refirió que **V** se auto inculpa por el delito de homicidio dentro de la referida **AP2**.

De igual forma incurrieron en responsabilidad **AR5** y **AR6**, por no garantizar la integridad física de **V**, en vista que recabaron su declaración, en la que supuestamente se auto inculcó sin apegar a los principios del debido proceso, tolerando con su consentimiento o aquiescencia los actos de tortura. En ese sentido es importante recordar que de conformidad al artículo 1º de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no sólo quien comete directamente el acto de tortura es responsable de la misma, sino que también lo son aquellos servidores públicos que los permiten por consentimiento o aquiescencia. También es conveniente indicar que, de conformidad al artículo 3 inciso a) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, son responsables de cometer el delito de tortura los funcionarios que pudiendo impedir los actos de tortura, no lo hagan.



## Posicionamiento por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo con relación a la tortura.

Este Organismo Público Autónomo ha sido muy claro y enfático en señalar que toda persona que realice conductas antijurídicas debe hacerse responsable conforme a las normas y procedimientos aplicables; toda aquella persona que presuntamente cometa un delito debe de ser investigado y sancionado conforme a ley, puesto que las conductas delictivas afectan a la sociedad en su conjunto y en particular a las personas que han sido víctimas de delitos.

Así mismo considera que la investigación y persecución de los delitos por parte de la Fiscalía General del Estado es completamente compatible con el respeto a los derechos humanos, puesto que el fin mismo de las autoridades encargadas de investigar los delitos es precisamente la protección de bienes jurídicos indispensables para una sociedad democrática de derechos. En ese sentido, las instituciones de procuración e impartición de justicia no sólo tienen la obligación constitucional y legal de proteger los derechos humanos, sino que ese deber es reforzado por la naturaleza de las funciones que realiza.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tiene el deber jurídico de investigar por todos los medios lícitos que tiene a su alcance las conductas delictivas que son denunciadas o querelladas, no obstante, también tiene la obligación y deber de sancionar a aquellos servidores públicos que cometen delitos en la investigación de los mismos. Permitir que las investigaciones sean realizadas a través de prácticas de tortura no vuelve a las personas que laboran en las instituciones de seguridad pública más eficaces y efectivas, las vuelve delincuentes, puesto que la Tortura, los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes son dos de los delitos más graves existentes en el sistema jurídico mexicano y quintanarroense.

En el sistema jurídico internacional, interamericano, nacional y estatal existe una proscripción absoluta de la tortura, puesto que es considerada como violación al derecho humano a la dignidad de las personas, independientemente de la finalidad con la que se realice, así mismo es considerada como un delito contra la integridad de las personas y contra el funcionamiento de la administración de justicia.

Esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, comparte lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que la tortura constituye un acto que viola directamente el derecho humano a la dignidad humana, así como los derechos de libertad personal y a contar con una defensa adecuada por parte de la persona sujeta a un procedimiento penal. Así mismo que al ser consideradas pruebas ilícitas las obtenidas por medio de tortura, necesariamente afectaran directamente en el acceso a la justicia de las víctimas de delitos, puesto que un número



considerable de casos comprobados y analizados por diversas instancias como la Organización de las Naciones Unidas o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, las confesiones a base de tortura han servido más para fabricar culpables que para obtener justicia.

Tal y como lo ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, el uso de la tortura durante los interrogatorios no sólo es ilegal, sino que es inmoral, en palabras del Alto Comisionado *"La tortura y los malos tratos infligidos a personas sospechosas de haber cometido un delito no sólo constituyen una práctica terriblemente errónea, sino que, desde la perspectiva del interrogador, también son métodos contraproducentes. Abundantes pruebas científicas e históricas demuestran que la información facilitada por los reos sometidos a torturas no es fiable... Los funcionarios que tienen la obligación de hacer cumplir la ley no deberían socavar el Estado de derecho. Si la policía viola ley con el fin de hacerla cumplir, brinda un ejemplo de uso caprichoso y abusivo del poder. La institución que debe proteger a las personas se desvincula de los principios, hace caso omiso de las leyes y se convierte en una amenaza imprevisible..."*.

#### Transgresión a los instrumentos jurídicos.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos tutela y garantiza el derecho a la integridad personal en los artículos 1, 16, 19, 20 y 22; por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la integridad personal en los artículos 12, 13 y 30, estableciendo que todo trato que afecte la dignidad humana es contrario a ella, prohibiendo los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como las penas inusitadas y trascendentales.

Por su parte, los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Humanos; 3 y 5 de la Declaración de los Derechos Humanos; I y XXV, párrafo tercero de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y en los principios 1 y 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas; mismos que forman parte del bloque de constitucionalidad o parámetro de regularidad a la que están obligados todos los servidores públicos, establecen de manera categórica que toda persona tiene el derecho a que se respete su integridad física aun en situaciones extremas.

El derecho a la integridad y seguridad personal consagra o garantiza cuando menos cuatro sub garantías para su protección, y estas son: 1) nadie puede ser molestado indebidamente en su persona, familia o domicilio; 2) la prohibición de un mal tratamiento durante la detención de una persona en flagrancia, en la ejecución de una orden de aprehensión o en los centros de detención



y/o prisiones; 3) la prohibición de incomunicación o tortura a las personas; y 4) la prohibición de azotes, palos, tormentos de cualquier especie y/o cualquier pena cruel, inusitada o trascendental.

En ese orden de ideas, el núcleo central del derecho a la integridad personal es la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho humano a no ser sometido a tortura es contemplado indirectamente a través de las obligaciones de protección, respeto y garantía, en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también de manera directa en los artículos 19 último párrafo y 20 inciso B fracción II del mencionado ordenamiento, que en lo conducente disponen:

*"Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley..."*

Artículo 19...

*...Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades...*

Artículo 20 °... B. De los derechos de toda persona imputada:

...

*II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;..."*



De la lectura de los artículos transcritos se desprenden las obligaciones de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de conformidad a los más grandes estándares internacionales, puesto que incluso el artículo 1º señala que en caso de que exista una norma interna que restrinja un derecho, con base en el principio pro persona, la autoridad se encuentra en la obligación de aplicar el tratado internacional que sea más favorable a la tutela del derecho de la persona. Así mismo, el artículo 20 constitucional establece la prohibición absoluta de la tortura como forma de allegarse de pruebas, también prohíbe la incomunicación e intimidación. En ese contexto, el mencionado dispositivo constitucional establece el derecho a declarar o a guardar silencio, a no auto incriminarse.

Como ya se ha señalado en la presente Recomendación, investigar los delitos cometiendo actos de tortura no hace a los servidores públicos que llevan a cabo la investigación más eficientes y eficaces, los convierte en delincuentes, puesto que la tortura es uno de los crímenes más aberrantes que atentan no sólo contra la dignidad humana y la integridad personal de quienes son interrogados, sino también contra la propia comunidad que presuntamente se busca proteger. Es por ello que la prohibición de la tortura es absoluta en el derecho internacional y en el sistema jurídico nacional; tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticas en resolver que la tortura es inadmisibles bajo cualquier circunstancia, incluso en estado de excepción como lo son perturbación grave de la paz pública o la guerra, incluyendo la prohibición de la tortura como parte del bloque duro de derechos que no puede ser restringidos o limitados en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública; el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

*“Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.*

*En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de*



*la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos..."*

Acorde con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conformando el bloque de constitucionalidad o regularidad constitucional, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes define tortura de la siguiente manera:

*"Artículo 1*

*1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término 'tortura' todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."*

Igualmente, parte del bloque de constitucionalidad, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece en sus artículos 2 y 3 la definición de tortura también establece quienes son responsables de la comisión del delito de tortura:

*"ARTÍCULO 2*

*Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.*



## ARTÍCULO 3

*Serán responsables del delito de tortura:*

- a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.*
- b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices."*

De lo dispuesto por las convenciones internacionales transcritas, se observa que no sólo cometen el delito de tortura las personas que inflijan de manera intencional sufrimientos físicos o mentales a una o varias personas con motivo de una investigación criminal, sino también son cómplices o partícipes quienes pudiendo impedirlo no lo hagan. En el caso que nos ocupa, las personas que estaban encargadas de su custodia no sólo tenían prohibido cometer actos de tortura, estaban obligadas a impedir que otras personas lo hiciera. Al no haber impedido este hecho o denunciado, todos los involucrados tienen distintos grados de autoría o participación.

La premisa en la cual se sustenta el sistema de justicia penal es el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los imputados, en el orden normativo estatal la prohibición de la tortura es absoluta. En efecto, de acuerdo con el contenido de los textos normativos transcritos en los párrafos que anteceden, cuando una autoridad vulnera el derecho a la integridad personal de un gobernado de manera intencional, provocando sufrimientos físicos o mentales, con la finalidad o propósito de investigar hechos delictivos comete tortura. Así mismo, son responsables de esos actos quienes pudiendo impedirlo no lo hagan, así como aquellos que induzcan, ordenen o instiguen su comisión.

Con sus acciones y/u omisiones los servidores públicos señalados también incumplieron con obligaciones específicas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que en su artículo 40, fracciones I y V, dispone lo siguiente:

*"Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:*

- I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;*

...



*V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;...”*

Por lo que derivado de la investigación realizada por este Organismo y como ha quedado demostrado y relacionado en las evidencias descritas que **V** fue víctima de tortura física y psicológica, tanto por parte de los agentes de la **SMSPT, AR1, AR2 y AR3**; como por agentes de la **PME**, entre los cuales identificó a **AR4**; así como de parte del agente del **MP, AR5** y su oficial secretario **AR6**, por haber tolerado con su consentimiento o aquiescencia los actos de tortura al dar fe de una declaración que había sido obtenido con tortura.

## V. REPARACIÓN

De conformidad a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En efecto, el instrumento normativo, en la parte que interesa, dispone lo siguiente:

*“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

En un estado democrático de derecho, toda persona debe estar segura de que éste debe ser el garante y protector de sus derechos humanos y que, en caso de sufrir una violación a éstos, asumirá la obligación de reparar los daños causados por dicha violación. Ese compromiso del Estado fue traducido en la legislación secundaria, en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, que en su artículo 4 en la parte que interesa establece:

*“Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.”*



En este tenor, el artículo 27 del mismo ordenamiento jurídico menciona lo siguiente:

*"Artículo 27. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.*

*Para los efectos de la presente ley, la reparación integral comprenderá:*

- I. *La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;*
- II. *La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;*
- III. *La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Éste se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;*
- IV. *La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las víctimas, y*
- V. *Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos humanos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir."*

Derivado de lo anterior, atendiendo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que establece que *"en el proyecto de recomendación se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, de ser procedente, en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado"*, se considerarán en el caso que nos ocupa:

### MEDIDAS DE REHABILITACIÓN

Esta medida debe incluir atención médica, psicológica y/o psiquiátrica, que previa valoración realizada por personal profesional especializado, deberá proporcionarse y prestarse de forma continua hasta que V como víctima de tortura, alcance su total sanación física, psíquica y emocional, a través de atención adecuada a los padecimientos sufridos. Esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con su consentimiento, brindando información previa clara y suficiente. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario y deben incluir la provisión de medicamentos.



## MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

Al acreditarse las violaciones a derechos humanos señaladas en el capítulo de observaciones en agravio de V, el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad y la Fiscalía General del Estado deberán indemnizarlo, a efecto de que se proceda a la compensación por los daños ocasionados, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y demás normatividad aplicable al caso.

Al respecto, los artículos 29 y 70 Bis de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo establecen que la compensación que se le debe realizar a las víctimas debe ser realizada directamente por la Institución responsable de la violación a los derechos humanos, la mencionada ley es obligatoria para todas las autoridades estatales y municipales, incluyendo los Organismos Públicos Autónomos, y establece lo siguiente:

*"Artículo 29. ...*

*Los entes públicos estatales y municipales responsables de violaciones a derechos humanos en términos del artículo 70 de esta Ley, tendrán la obligación, de llevar a cabo la medida de compensación, a las víctimas con cargo a su presupuesto.*

*....*

*Artículo 70 Bis. Los entes públicos estatales y municipales responsables señalados en la recomendación emitida por organismo público de protección a los derechos humanos, serán las encargadas de llevar a cabo la medida de compensación, en términos del artículo 29 de la presente Ley."*

Igualmente se deberá realizar todas y cada una de las gestiones necesarias a efecto de inscribir a V en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, a fin de que, en lo conducente, tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Motivo por el cual, esta Comisión de los Derechos Humanos remitirá copia de la presente Recomendación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

## MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

En el presente caso, la satisfacción consistirá en que la **Presidenta del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez y Fiscal General del Estado**, respectivamente, giren instrucciones a quien corresponda a efecto de iniciar hasta su conclusión, el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos responsables; y, en su caso, se les aplique la sanción procedente, por la vulneración a los derechos humanos de V.



De igual forma, deberá agregarse copia de la presente Recomendación al expediente laboral de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6 para efecto de que obre constancia de que, a juicio de esta Comisión, vulneraron los derechos humanos de V.

Asimismo, se deberá realizar una declaración oficial por escrito, como un acto de reconocimiento de responsabilidad, en el que acepte la responsabilidad respecto de los hechos acreditados en la presente recomendación, y realicen un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar tales hechos. Dicho acto de reconocimiento de responsabilidad deberá ser publicitado en por lo menos dos medios de comunicación impresos así como en las páginas oficiales de ambas autoridades. Por lo que, para publicar los datos personales de V, se deberá recabar su anuencia por escrito.

#### MEDIDAS DE NO REPETICIÓN.

Para el cumplimiento se deberá diseñar e impartir a los agentes operativos de la **Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez** y en particular a los Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la ahora Vice-Fiscalía de la Zona Norte del Estado de la **Fiscalía General del Estado**, un programa de capacitación y formación en materia de derechos humanos, de la función policial, de la cultura de la legalidad, la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas que deben regir su actuación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tiene a bien dirigir los siguientes:

#### V. PUNTOS DE RECOMENDACIÓN

Al **C. Fiscal General del Estado de Quintana Roo** los siguientes puntos:

**PRIMERO.** Se tomen las medidas necesarias para que, como medida de rehabilitación, en su calidad de víctima de violaciones a derechos humanos, se proporcione, previa autorización de V, atención psicológica y/o psiquiátrica, así como los medicamentos que en su caso requiera hasta su recuperación total, debiendo realizarse un diagnóstico inicial.

**SEGUNDO.** Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a realizar el pago de una compensación a V que por Ley le corresponda, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.



**TERCERO.** Se realicen los trámites oportunos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, hasta lograr la inscripción de **V** en el Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Lo anterior a efecto de que, en lo conducente, pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

**CUARTO.** Instruya a quien corresponda, con la finalidad de dar inicio hasta su conclusión, al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de **AR4, AR5 y AR6**; por haber violentado los derechos humanos de **V** en los términos precisados en el presente instrumento jurídico y se les aplique la sanción que conforme a derecho haya lugar.

En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, la autoridad recomendada deberá agregar a sus expedientes laborales la resolución que, en su caso, así lo determine; asimismo, se deberá agregar copia de la presente Recomendación al expediente laboral de **AR4, AR5 y AR6**, para efecto de que obre constancia de que, a juicio de esta Comisión, vulneraron los derechos humanos de **V**.

**QUINTO.** Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que de manera perentoria se inicie una Carpeta de Investigación el delito de Tortura en contra de **AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6 y otros**.

**SEXTO.** Realice una declaración oficial por escrito, como un acto de reconocimiento de responsabilidad, en el que acepte la responsabilidad respecto de los hechos acreditados en la presente recomendación, y realicen un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar tales hechos. Dicho acto de reconocimiento de responsabilidad deberá ser publicitado en por lo menos dos medios de comunicación impresos, así como en la página oficial de la Fiscalía General del Estado. Para publicar los datos personales de **V**, deberá recabar su anuencia por escrito.

**SÉPTIMO.** Instruya a quien corresponda a efecto de diseñar e impartir al personal a su cargo, en particular a los Fiscales del Ministerio Público y Policías Ministeriales adscritos en la ciudad de Cancún, un programa de capacitación y formación en materia de derechos humanos; prevención y sanción a la tortura, cultura de la legalidad, observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas que deben regir su actuación.

A la C. Presidenta Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, los siguientes puntos:



**PRIMERO.** Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a realizar el pago de una compensación a **V** que por Ley le corresponda, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.

**SEGUNDO.** Instruya a quien corresponda, con la finalidad de dar inicio hasta su conclusión, al procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de **AR3**; por haber violentado los derechos humanos de **V**, en los términos precisados en el presente instrumento jurídico y se les aplique la sanción que conforme a derecho haya lugar. En caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, la autoridad recomendada deberá agregar a su expediente laboral la resolución que, en su caso, así lo determine.

Asimismo, deberá agregarse copia de la presente Recomendación al expediente laboral de **AR1**, **AR2** y **AR3**, para efecto de que obre constancia de que, a juicio de esta Comisión, vulneraron los derechos humanos de **V**.

**TERCERO.** Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se presente denuncia en contra de **AR1**, **AR2** y **AR3**, por el delito de tortura cometido en agravio de **V**.

**CUARTO.** Realice una declaración oficial por escrito, como un acto de reconocimiento de responsabilidad, en el que acepte la responsabilidad respecto de los hechos acreditados en la presente recomendación, y realicen un compromiso explícito para prevenir, investigar, sancionar y erradicar tales hechos. Dicho acto de reconocimiento de responsabilidad deberá ser publicitado en por lo menos dos medios de comunicación impresos, así como en la página oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Para publicar los datos personales de **V**, deberá recabar su anuencia por escrito.

**QUINTO.** Instruya a quien corresponda a efecto de diseñar e impartir al personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Benito Juárez, un programa de capacitación y formación en materia de derechos humanos; prevención y sanción a la tortura, cultura de la legalidad, observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas que deben regir su actuación.

En consecuencia, se ordena su notificación conforme a los artículos 62 y 63 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y 47 y 48 de su Reglamento.

La presente Recomendación, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política del Estado, tiene el carácter de pública. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley de la



## PRESIDENCIA

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y 50 de su Reglamento, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación o no aceptación de esta Recomendación, nos sea informada dentro del término de **cinco días hábiles siguientes** a su notificación.

En ese sentido y con el mismo fundamento jurídico, las pruebas de cumplimiento total deberán ser remitidas a esta Instancia, dentro de los seis meses posteriores a la aceptación.

En términos de lo previsto por el numeral 56-Bis de la Ley que regula la actuación de este Organismo, le informo que la negativa sobre la aceptación de esta Recomendación, o su incumplimiento total o parcial una vez aceptada, dará lugar a que la Comisión esté en aptitud de dar vista al H. Congreso del Estado, a efecto de que la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos se sirva citar a comparecer públicamente ante la misma, a los servidores públicos involucrados, con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.

Seguro de su compromiso por el respeto a los derechos humanos y de su indeclinable voluntad de combatir aquellos actos o corregir aquellas prácticas que atenten contra la dignidad humana, no dudo que su respuesta a este documento será favorable, en bien del objetivo que a todos nos es común.

ATENTAMENTE



MTRO. MARCO ANTONIO TÓH EUÁN  
PRESIDENTE